

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RÚA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO LABORAL
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-003-2019-00280-01
RADICADO INTERNO	: 090-23
DECISIÓN	: REVOCA Y CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 114

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que el señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA, es pensionado por Colpensiones por Vejez desde el 1 de abril del 2013, por medio de Resolución No. GNR 238688 de 2013, y que es beneficiario del Régimen de transición contemplado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual se debió de haber pensionado bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del año 1990, y como consecuencia de lo anterior se CONDENE a COLPENSIONES al pago del Incremento pensional en un 14% por CONYUGE, a partir del día 1 de abril del año 2013, hasta que subsistan las causas que le dan origen, y la indexación de las condenas.

Como fundamento fáctico de lo anterior manifestó que fue pensionado por Colpensiones en el riesgo de vejez desde el 01 de abril del 2013 mediante

la Resolución GNR 238688 del 24 de septiembre del 2013 la cual le fue reconocida con base en la ley 71 de 1988 sin hacerle un estudio al régimen de transición contenido en el decreto 758 de 1990 del cual dice ser beneficiario. Que desde hace aproximadamente 20 años vive con la señora Edith Amparo Quiroz Madrigal, contrajeron matrimonio el 21 de febrero del 2015 y que dicha unión no se procrearon hijos y que además tiene derecho al incremento personal por cónyuge en un 14% desde el reconocimiento de la pensión, que su cónyuge no tiene propiedades no recibe ninguna pensión y ayuda del Estado, no se encuentra vinculada a ninguna empresa y depende de un todo y por todo el demandante reuniendo los requisitos para hacerse acreedor al incremento pensional toda vez que la norma que lo consagra no fue derogada ni expresa ni tácitamente por la ley 100 de 1993, que además solicitó dicho incremento a Colpensiones sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda se haya resuelto la misma.

RESPUESTA DE LA DEMANDA DE COLPENSIONES

Esta entidad dio respuesta manifestando que no acepta ninguno de los hechos, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación de pagar incrementos por personas a cargo, cobro de lo no debido, ausencia de causa para pedir, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios o indexar las condenas, prescripción y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia del 01 de marzo de 2023, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ prospera la excepción propuesta por COLPENSIONES de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, al no ser beneficiario del régimen de transición el demandante WILLIAM DE JESÚS PIEDRAHITA RÚA y su sucesora procesal EDITH AMPARO QUIROZ MADRIGAL, ni ser beneficiaria de incrementos pensionales por cónyuge a cargo.

ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas en su contra, y CONDENÓ en costas a la parte demandante fijando como agencias en derecho la suma de \$200.000.

RECURSO DE APELACION

Inconforme con la anterior decisión la apoderada de la parte demandante interpone recurso de apelación manifestando que el juez para negar las pretensiones de la demanda dijo que el demandante no era beneficiario del régimen de transición como tampoco de los beneficios que trae el decreto 758 de 1990, indicando que se aparta de dicha consideración por cuánto el demandante cumplía con los requisitos tanto del acto legislativo 01 del 2005 como el decreto 758 de 1990 por cuánto según la historia laboral el señor William para el año 2005 contaba con la densidad de semanas para que se lo hubiera respetado el régimen de transición pues contaba con más de 200 semanas cotizadas al sistema aparte de que cumplía con los requisitos de edad como lo requiere el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

Asimismo, indica que al ser beneficiario del régimen de transición en aplicación del decreto 758 1990 tiene derecho a una tasa de reemplazo del 90% por contar con 1322 semanas cotizadas por lo anterior solicita si revoque la sentencia concediendo la re-liquidación y los incrementos pensionales.

ALEGATOS DE CONCLUSION.

El apoderado de Colpensiones solicita se confirme la sentencia de primera instancia argumentando en síntesis no tener derecho a los incrementos pensionales solicitados además por cuanto no es beneficiario del régimen de transición contenido en el decreto 758 de 1990.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Se centra el problema jurídico en esta instancia a determinar si el señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA es beneficiario del régimen de transición contenido en el decreto 758 de 1990, y en caso de ser positivo. si hay lugar al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas a cargo consagrados en el Decreto 758 de 1990, a la indexación, y a las costas procesales.

Antes que nada debe precisarse que la apoderada de la parte demandante tanto en los alegatos de conclusión expuestos en primera instancia como en el recurso de apelación interpuesto introduce otras peticiones nuevas que no fueron formuladas con la demanda relacionadas con la reliquidación pensional en el 90% del IBL como tasa de reemplazo del decreto 758 de 1990, sin embargo se precisa que dichas peticiones no fueron formuladas

en momento alguno en la demanda pues en la misma solo se solicitó la declaratoria del régimen de transición con el decreto 758 de 1990 y los incrementos pensionales, razón por la cual no se estudiara dicha petición en esta instancia además porque la misma sería innecesaria e improcedente en la medida que al señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA le fue reconocida la pensión de vejez con un IBL de \$627.485 y al aplicarle el 90% pretendido igual daría una mesada pensional inferior al salario mínimo, esto es, daría una mesada de \$564.736, y el salario mínimo para el 2013 lo fue de \$589.500.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la declaración del régimen de transición en virtud de lo consagrado en el decreto 758 de 1990.

Respecto a los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición en el caso bajo estudio, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 establece que:

“La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.*

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.

El Parágrafo transitorio 4º del A.L. 01 de 2005, que tiene vigencia a partir del 29 de julio de 2005, expresó:

“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. (subraya de la Sala)

Partiendo de lo expuesto se tiene que el demandante si es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100/93 toda vez

que por haber nacido el 11 de enero de 1953, (fls 10 PDF 04), para el 01 de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, y según lo consignado en la Resolución GNR 238688 de 2013 que da cuenta del tiempo de servicio público sin cotización al ISS para el 25 de julio de 2005 contaba con **1.170**, por lo que cumple con el requisito del acto legislativo 01 de 2005 para que el régimen de transición se le extienda hasta el 31 de diciembre de 2014.

Además de lo anterior se tiene según la prueba obrante en el expediente que la demandante tenía entre semanas cotizadas y al servicio de entidades públicas sin cotización al ISS un total de **1.244** por lo que cumple con el requisito de tener 1000 semanas en toda su vida laboral en vigencia del régimen de transición, según las exigencias del decreto 758 de 1990.

Lo anterior encuentra sustento conforme con el precedente jurisprudencial contenido entre otras en las sentencias T-090-2009, T-181-211, T-193-2013 y SU-769-2014, según el cual es posible la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con aportes realizados al ISS hoy Colpensiones para efectos de aplicar el Decreto 758 de 1990, desarrollo acogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia SL-1947 de 2020, en la que sustentó su nuevo criterio en que la Ley 100 de 1993 prevé diversos instrumentos de financiación de las pensiones, como: bonos, cálculos actuariales o cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna y dado que las pensiones de transición se causan en su vigencia, es procedente su computo sin distinción del origen.

Al respecto se dijo en la decisión reseñada:

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultraactiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el párrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un párrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este párrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad.

Lo anterior supone que el demandante quien se beneficiaba de la transición pensional y realizó cotizaciones al ISS hoy Colpensiones y trabajó para empleadores del sector público le son aplicables dos normatividades la Ley 71 de 1988 y el Decreto 758 de 1990.

Partiendo de lo anterior debe precisarse que esta Sala la interpretación que venía realizando del precedente constitucional, en concreto de lo dicho en la sentencia T-508-2017, le permitía sostener que la sumatoria de tiempos solo era aplicable para garantizar el acceso a la pensión de vejez y no para incrementar la tasa de reemplazo, sin embargo, cualquier duda interpretativa en este sentido fue despejada con claridad por la Corte Constitucional en la sentencia T-219-2021, en la que se dijo:

Finalmente, en lo que respecta a la aparente distinción entre una situación de reconocimiento y otra de reliquidación, es necesario señalar que, además de que esa diferencia no tiene sustento en la línea jurisprudencial construida, resulta abiertamente violatoria de los principios de igualdad y de favorabilidad. En efecto, bajo esa distinción, la definición de una misma situación pensional conforme al artículo 53 superior se limitaría por un escenario formal en el que no incide la actividad del trabajador.

Este criterio por lo demás fue reiterado por el pleno de la Alta Corporación en la sentencia SU-273-2022, en la que resaltó la unanimidad que con su criterio guarda la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siendo muestra de esta particular la sentencia SL-2557-2020, en la que órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria indicó:

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante.

Así las cosas, la recurrente tiene la razón en cuanto afirma que tiene derecho a la reliquidación reclamada porque el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990 es más favorable que aquel con el que la entidad de seguridad social accionada reconoció la pensión. (resalto intensional).

Una vez conocidos estos argumentos y la unidad que existe en los mismos, está Sala en reconocimiento de la fuerza vinculante del precedente acata el mismo, abandonando cualquier interpretación que en contrario sostuviera con anterioridad.

Partiendo de lo mencionado, es claro para la Sala que el demandante si tendría derecho a la pensión de vejez con fundamento en las reglas

establecidas en el decreto 758 de 1990 en aplicación de la acumulación de tiempos públicos y privados, sin embargo, en la presente providencia como se advirtió según lo pretendido en la demanda solo es posible realizar la declaratoria de que es beneficiario del régimen de transición en aplicación del decreto 758 de 1990 para efectos de determinar si es procedente o no los incrementos pensionales por cónyuge a cargo consagrados en tal normativa, pues la petición de aplicar la tasa de reemplazo del 90% formulada en los alegatos de conclusión en primera instancia y en el recurso de apelación no guardan correspondencia ni congruencia con lo pretendido en la demanda, además de que como se advirtió la misma sería improcedente en la medida que al señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA le fue reconocida la pensión de vejez con un IBL de \$627.485 y al aplicarle el 90% pretendido igual daría una mesada pensional inferior al salario mínimo.

En virtud de lo mencionado se REVOCARÁ parcialmente la sentencia de primera instancia para en su lugar DECLARAR que el señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

2. De los incrementos pensionales por cónyuge a cargo

Está probado en el proceso que al demandante le fue reconocida la pensión de vejez por Colpensiones a través de la Resolución GNR 238688 de 2013 a partir del 01 de abril de 2013 en cuantía de un salario mínimo. (fls 18 y ss del expediente digital).

Los incrementos pensionales de que habla el Art 21 del Decreto 758 del 1990, no era un tema que las cortes trataran en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, ha sentado jurisprudencia en sentencia con radicado 21.517 del 27/julio/ 2005, donde dijo que estos perduraban aun después de la entrada en vigencia de la Ley 100

“Es verdad que los incrementos de las pensiones no están involucrados en la ley 100, pero ello no significa que pierdan su vigencia; por el contrario, si tal normatividad no los reguló, no quiere decir que los hubiera derogado, entonces en ese orden conservan su pleno vigor.”

Igualmente, las del 1º de agosto de 2010, rad. 36345, en la que a la vez remite a sentencias anteriores de diciembre 5 de 2007 radicado 29741 y julio 27 de 2005 radicado 21517.

Pese a lo anterior en la sentencia T-456 de 2018 la Corte cambia su posición frente a los referidos incrementos y expresa que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los mismos si quedan derogados y que solo se tendrá en cuenta el régimen de transición de que trata el Art. 36 de la Ley 100, en temas relacionados con la adquisición de la pensión lo relativo a la edad, semanas cotizadas y monto. Y Finalmente en el año 2019 la Corte Constitucional en la **sentencia SU-140** reiteró que los incrementos pensionales establecidos en el art. 21 del Decreto 758 de 1990, fueron derogados y perdieron su vigencia con la entrada en vigencia de la Ley 100, esto es que **los que adquirieron su derecho a pensionarse después del 1º de abril de 1994 no tienen derecho a incrementos pensionales aun estando en régimen de transición**, salvo de los que ya hubieran adquirido el derecho a pensionarse antes de la mencionada fecha. Y también expresó la Corte que dichos incrementos son contrarios al Acto Legislativo 01 del 2005, manifestando lo siguiente.

*“Cierta/, ante la regulación integral y exhaustiva en materia pensional que hizo la Ley 100, no cabe sino concluir sobre la **derogatoria orgánica** del régimen anterior, dentro del cual cohabitaban los referidos incrementos (...)*

... si cupiere duda sobre la derogatoria orgánica que, por virtud de la expedición de la Ley 100, sufrieron los incrementos que en su momento previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, tal derogatoria se encontraría confirmada con la consagración de un régimen de transición que se diseñó para proteger las expectativas legítimas exclusivamente respecto del derecho a la pensión, pero que no llegó a extenderse a derechos extra pensionales accesorios de dicha pensión, más aún cuando –como sucede con los incrementos que prevé el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del subsiguiente artículo 22 ibíd (...)

No obstante, si aún a pesar de todo lo atrás expuesto, todavía se estimara que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no hubiera sido objeto de derogatoria alguna, sería entonces menester inaplicarlo por inconstitucional en casos concretos pues su eventual reconocimiento violaría el inciso 11 del artículo 48 superior, según la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005.”

En consecuencia, y acogiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional considera que no hay lugar al reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo por tratarse de una pensión reconocida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

aun cuando hubiera sido reconocida con régimen de transición, por lo que la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA íntegramente, pero por las razones antes enunciadas.

Ahora, con respecto a la obligatoriedad de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional como lo es para el caso la sentencia SU 140 de 2019, vale la pena recordar lo indicado por esta misma corporación en sentencia SU 611 de 2017 en la que se indicó que:

*“8.14. En este escenario, es permitente destacar que la vinculatoriedad del precedente tiene especial relevancia en el caso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues sus efectos desbordan la especialización que caracteriza a la administración de justicia y que determina que en cada una de las jurisdicciones los funcionarios judiciales tengan como referencia, principalmente, al respectivo órgano de cierre. **En efecto, la jurisprudencia constitucional tiene incidencia directa y general en la jurisdicción en la medida que, por mandato del artículo 241 Superior, a esta Corporación “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (...).”***

*8.15. Bajo este orden de ideas, el sometimiento general a la Carta Política de todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, y las autoridades administrativas determina que el precedente constitucional tenga una manifestación especial y amplificada de la vinculatoriedad que se ha atribuido de manera general al precedente de las altas cortes. Ello se materializa, particularmente, según los efectos que se prediquen de los fallos que profiere el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, es decir, según se trate de sentencias en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, o de sentencias de tutela proferidas por las salas de revisión **o por la Sala Plena en sede de unificación.***

(...)

8.20. Por su parte, en lo que concierne a los fallos de esta Corporación al realizar el control concreto mediante sentencias de tutela, estos tienen, en principio, efectos inter partes, tal como se dispone en el numeral segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—¹ y el artículo 36 del Decreto 2191 de 1991. Sin embargo, esta Corporación al examinar la constitucionalidad del mencionado artículo 48 reconoció efectos a la doctrina constitucional que fija el contenido y alcance de los derechos constitucionales, como una armonización entre el principio de independencia judicial y el de igualdad, al considerar lo siguiente:

“La doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad”².

¹ “(...) 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.

² Sentencia C-037 de 1996.

8.21. Lo anterior llevó a que en el fallo citado se decidiera que resultaba exequible el efecto inter partes de las sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, bajo el entendido que **“las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad”**. (Resaltado fuera del texto original).

8.22. En este contexto, las sentencias de revisión que definen el contenido y alcance de los derechos constitucionales vinculan a todos los funcionarios judiciales a la hora de proferir cualquier fallo en su especialidad, de modo que se aplique el ordenamiento a la luz de la interpretación que la Corte haya definido de los derechos superiores que tengan incidencia en el caso objeto de estudio.

(...)

8.24. Ahora bien, no puede pasarse por alto que la vinculatoriedad de las sentencias proferidas en ejercicio del control concreto está subordinada a que se identifique el precedente en vigor, pues, como es propio de la naturaleza misma de la función judicial y en desarrollo del principio de autonomía, también al nivel de las altas cortes, es plausible que en una corporación se adopten distintas decisiones para supuestos fácticos y jurídicos similares, como puede suceder entre las distintas salas de revisión de la Corte Constitucional. En consecuencia, la vinculación de las autoridades judiciales y administrativas pasa por el hecho que, previamente, se identifique el precedente en vigor aplicable y que, como lo ha sostenido esta Corporación, “corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión”³. **Asimismo, el precedente puede ser definido a través de la actividad de unificación que realiza la Sala Plena y que, a diferencia de una sentencia de tutela aislada dictada por una sala de revisión, basta con una sentencia unificadora para que exista un precedente en vigor**⁴. (resalta de la sala)

Partiendo de la jurisprudencia transcrita se evidencia que la sentencia SU 140 de 2019 acogida por esta Sala, es plenamente aplicable y debido a la cual se recoge por la Sala la postura anterior que se tenía con respecto a la vigencia de los incrementos pensionales por personas a cargo como se advirtió, debiendo negarse dicha pretensión al evidenciar que los mismos no se encuentran vigentes después de la expedición de la Ley 100 de 1993.

Por todo lo expuesto con anterioridad lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en este punto en particular, por las razones señaladas en esta providencia.

³ Entre otras, ver el Auto 300 de 2006 y el Auto 131 de 2004.

⁴ Así lo explicó esta Corporación en la Sentencia SU-30 de 2015, al comparar las sentencias de unificación de la Corte Constitucional con los fallos de constitucionalidad, en el siguiente sentido: “En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política”.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de \$290.000.

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar DECLARAR que el señor WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RUA es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia. En todo lo demás se CONFIRMA la sentencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante en la suma de \$290.000.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-003-2019-00280-01
Radicado Interno 090-23



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: WILLIAM DE JESUS PIEDRAHITA RÚA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO LABORAL
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-003-2019-00280-01
RADICADO INTERNO	: 090-23
DECISIÓN	: REVOCA Y CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 23 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 23 de mayo de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO